



**Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes**

Distr. general
18 de enero de 2012
Español
Original: francés

Comité contra la Tortura

Comunicación N° 351/2008

**Decisión adoptada por el Comité en su 47° período de sesiones,
celebrado del 31 de octubre al 25 de noviembre de 2011**

| | |
|---------------------------------------|--|
| <i>Presentada por:</i> | E. L. (no representada) |
| <i>Presunta víctima:</i> | La autora de la queja |
| <i>Estado parte:</i> | Suiza |
| <i>Fecha de la queja:</i> | 9 de mayo de 2008 (presentación inicial) |
| <i>Fecha de la presente decisión:</i> | 15 de noviembre de 2011 |
| <i>Asunto:</i> | Extradición de la autora a la República Democrática del Congo |
| <i>Cuestiones de procedimiento:</i> | Fundamentación insuficiente de las alegaciones; falta de prueba de una violación <i>prima facie</i> del artículo 3; ausencia del riesgo personal, real y concreto de tortura en la República Democrática del Congo |
| <i>Cuestiones de fondo:</i> | Riesgo de tortura en caso de extradición de la autora |
| <i>Artículos de la Convención:</i> | 3 y 22 |

Anexo

Decisión del Comité contra la Tortura a tenor del artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (47º período de sesiones)

respecto de la

Comunicación Nº 351/2008

Presentada por: E. L. (no representada)

Presunta víctima: La autora de la queja

Estado parte: Suiza

Fecha de la queja: 9 de mayo de 2008 (presentación inicial)

El Comité contra la Tortura, establecido en virtud del artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Reunido el 15 de noviembre de 2011,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 351/2008, presentada al Comité contra la Tortura en nombre de la Sra. E. L. en virtud del artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Habiendo tenido en cuenta, toda la información que le han presentado la autora de la queja y el Estado parte,

Adopta la siguiente:

Decisión a tenor del artículo 22, párrafo 7, de la Convención contra la Tortura

1.1 La autora de la queja es E. L., de nacionalidad congoleña, nacida en 1988, que está en espera de su expulsión de Suiza a la República Democrática del Congo (RDC). Sostiene que esta medida constituiría una violación por Suiza del artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La autora no está representada por abogado.

1.2 El 18 de agosto de 2007, el Relator Especial sobre nuevas comunicaciones y medidas provisionales, actuando en virtud del párrafo 1 del artículo 108 del Reglamento del Comité, pidió al Estado parte que no procediera a la extradición de la autora a la RDC mientras su queja estuviera en examen.

Antecedentes de hecho¹

2.1 La autora sostiene que tras la pérdida de su madre en 1998 —su padre falleció en 1990— vivió con sus dos hermanos mayores hasta que estos se trasladaron a Rwanda para unirse a las fuerzas rebeldes en 2002. Desde ese momento, la autora vivió con sus vecinos. El 22 de junio de 2003, cuando la autora tenía 15 años, comenzó a trabajar de

¹ La presente exposición se basa en las comunicaciones de la autora y en las decisiones adoptadas en el marco del procedimiento de petición de asilo en Suiza.

recepcionista en la oficina del Relator de la Asamblea Nacional congoleña en Kinshasa, Raphaël Luhulu Lunghe. En el marco de su trabajo, la autora estaba encargada de recibir a las personalidades que se presentaban ante el Parlamento, preparar los expedientes de las sesiones y limpiar la oficina del Relator.

2.2 En 2004², la autora recibió al parecer una llamada telefónica de uno de sus hermanos, el cual le explicó que se había unido a las fuerzas rebeldes y le pidió que le transmitiera todas las informaciones de que tuviera conocimiento en el marco de su función, en particular las referentes a las leyes que se votarían o a la composición y las posiciones de las tropas armadas congoleñas. La autora obedeció a su hermano y le transmitió abundante información por teléfono³.

2.3 El 26 de enero de 2005 la autora fue apercibida por un miembro de la Agencia Nacional de Información (ANR)⁴, quien al parecer le manifestó que estaba al corriente de sus contactos con las fuerzas rebeldes y de la información secreta que les transmitía. Al día siguiente el Relator convocó a todos los empleados de su oficina y les informó de que la ANR había abierto diligencias y de que el informador sería descubierto tarde o temprano.

2.4 Al parecer, la autora informó inmediatamente a su hermano del apercibimiento del informador de la oficina. Ante la situación, el hermano organizó precipitadamente la fuga de la autora. Al día siguiente la autora se trasladó en piragua a Brazzaville, con ayuda de una persona de contacto de su hermano. Permaneció oculta varios días en una casa, antes de trasladarse a Suiza por avión el 22 de marzo de 2005.

2.5 El 23 de marzo de 2005 la autora presentó una demanda de asilo. En su decisión de 5 de junio de 2007, la Oficina Federal de Migración (ODM) consideró que las declaraciones de la autora carecían de un mínimo de verosimilitud. La ODM consideró en particular que no era verosímil que la autora tuviera acceso a información secreta en virtud de su función en la oficina del Relator, especialmente a información militar. Además, la autora no había podido precisar el contenido de la información secreta que había transmitido a su hermano ni explicar cómo había podido enterarse este último del cargo que ella desempeñaba en la oficina tras largos años de falta de contacto entre ellos. Por último, la ODM consideró que la situación en la RDC, donde no había una guerra civil declarada ni violencia generalizada en el conjunto de su territorio, no justificaba la existencia de un peligro concreto en el sentido del artículo 14 a), párrafo 4, de la Ley federal suiza sobre la estancia y la residencia de extranjeros.

2.6 El 4 de julio de 2007, la autora recurrió ante el Tribunal Administrativo Federal (TAF) contra esta decisión. El 26 de julio la autora presentó un ejemplar de un artículo de prensa del bisemanario congoleño *La Manchette*, de 28 de enero de 2005, en el que se anunciaba que la autora era buscada por la policía política, acusada de "tráfico de información y de espionaje". La autora señaló que este documento podía demostrar la realidad de sus temores de ser perseguida en el futuro⁵. El 6 de septiembre de 2007 el TAF rechazó el recurso, dando carácter firme a la decisión de la ODM de denegar el asilo y expulsar a la autora. El TAF llegó a la conclusión de que no era creíble que la autora no hubiera podido facilitar el más mínimo detalle sobre la naturaleza y el contenido de la información sensible y confidencial que habría transmitido a su hermano durante varios meses. El TAF consideró que las circunstancias en las que la autora afirmaba haber tenido conocimiento de que la ANR sospechaba que transmitía información a los rebeldes eran del todo inverosímiles, en particular el hecho de que un miembro de la ANR, en vez de

² No se indica la fecha exacta de esta llamada telefónica.

³ No se especifica el contenido de esa información.

⁴ La Agencia Nacional de Información es la agencia gubernamental de la República Democrática del Congo que acumula las funciones de los servicios de información del interior y el exterior.

⁵ Se adjunta copia de dicho artículo a la comunicación inicial de la autora.

aprehenderla, asumiera el riesgo de apercibirla del peligro que corría; y de que sus dos hermanos, exiliados en Rwanda desde hacía varios años, hubieran podido organizar, en menos de un día y tras una simple llamada telefónica, su salida precipitada del país. En cuanto al artículo de la revista facilitado por la autora, el TAF consideró que no tenía ningún valor probatorio ya que el ejemplar facilitado permitía todo tipo de falsificaciones, y que el artículo que aparecía en la página de la revista había sido impreso con caracteres de un tamaño diferente al de los demás artículos que figuraban en la misma página.

2.7 El 29 de noviembre de 2007 el TAF declaró inadmisibile la solicitud de revisión de la autora, considerando que no había aportado ningún nuevo elemento pertinente ni medios de prueba concluyentes. El 1º de febrero de 2008 la autora presentó una demanda de reconsideración de la decisión de la ODM de 5 de junio de 2007, que fue declarada inadmisibile por el TAF el 18 de marzo de 2008 por considerarla manifiestamente fuera de plazo.

La queja

3.1 La autora alega que de ser expulsada a la RDC correría el riesgo de ser sometida a tortura o malos tratos. Señala que desempeñó una función política en su país, que conocía varios secretos sobre la situación política y de seguridad y que se exilió a un país extranjero para pedir asilo, lo que para las autoridades congoleñas equivalía a considerarla "desertora". Sostiene que el regreso a su país la expondría a un peligro concreto y grave, pues, con toda probabilidad, sería sometida a un intenso interrogatorio y, en su caso, a malos tratos.

3.2 La autora sostiene que esos riesgos de tortura o malos tratos se desprenden de las actas de sus comparecencias, las conclusiones de sus recursos y los medios de prueba presentados en el marco de las actuaciones internas, en particular el artículo de la revista antes mencionado⁶, y del testimonio escrito del Sr. Luhulu Lunghe, que al parecer no se tuvo en cuenta, así como su *laissez-passer*, que demostraría su compromiso en el seno de la Asamblea Nacional.

3.3 La autora subraya la especificidad de los motivos de fuga de las mujeres en el procedimiento de asilo, pero no aporta otras explicaciones para justificar este argumento.

Observaciones del Estado parte sobre el fondo

4.1 El 17 de febrero de 2009 el Estado parte afirmó que la autora no había demostrado que correría un riesgo previsible, personal y real de ser sometida a tortura si regresaba a la RDC. El Estado parte señala que la autora nunca manifestó que hubiera sufrido malos tratos en el pasado. Además, no había dado carácter verosímil a las alegaciones relativas a la transmisión de información secreta a sus hermanos, vinculados a un movimiento rebelde. En particular no pudo explicar cómo se enteró su hermano de que estaba al servicio del Parlamento y de sus datos personales varios años después de haber abandonado Kinshasa. El Estado parte añade que sería sorprendente que la autora hubiera corrido el riesgo de perder su trabajo y de exponerse a consecuencias importantes por una simple llamada telefónica, tanto más cuanto que la actividad mencionada se dirigía contra la persona que habría ofrecido a la autora el cargo que ocupaba. Del mismo modo, la autora tampoco pudo indicar en qué momento su hermano se puso en contacto con ella, e incluso incurrió en contradicción al afirmar en una primera comparecencia que no había mantenido contacto con sus hermanos desde una última llamada telefónica que recibió cuando tenía 15 años hasta el día de su marcha, mientras que posteriormente afirmó que les había transmitido las información por teléfono. El Estado parte señala igualmente que la autora no pudo dar la

⁶ Véase el párrafo 2.6.

menor precisión sobre la información que decía haber transmitido, y que no era convincente su explicación de que no quería recordarla por miedo.

4.2 El Estado parte señala igualmente la existencia de contradicciones de hecho en las afirmaciones de la autora y su credibilidad. Según el Estado parte, la información que la autora facilitó sobre su entorno familiar tenía escaso fundamento y no correspondía a las relaciones sociales habituales en África. Así, parece inverosímil que la autora carezca de información sobre la familia de sus parientes o que no conozca ni la pertenencia étnica de su madre ni su fecha de nacimiento aproximada, ni sepa dónde están sus hermanos. El Estado parte añade que los motivos expuestos de su fuga no corresponden a la experiencia general ni a la lógica del comportamiento. Parece improbable que un agente de los servicios secretos haya corrido el riesgo de aprehender a la autora de las investigaciones de que era objeto, *a fortiori* en el clima de tensión existente en la RDC. Estas dudas se refuerzan por el hecho de que la autora mencionó en un primer momento que el agente la había llamado por teléfono, para manifestar a continuación que habló con ella personalmente. El Estado parte precisa que la autora describió su fuga de una manera superficial, sin poder indicar quién la ayudó, quién financió su viaje, cómo se desarrolló su fuga y cómo la organizaron sus hermanos desde Rwanda solamente en algunas horas.

4.3 El Estado parte afirma que la inverosimilitud del relato de la autora se refuerza por la presentación, en la fase de recurso, del artículo de una revista que evidentemente no era auténtico y cuyo contenido era insólito y contradecía al parecer las alegaciones de la autora en varios puntos. El artículo mencionaba que la autora era seguida todos los días por hombres uniformados, lo que ella no manifestó en ningún momento. El artículo hablaba también de las investigaciones realizadas por parientes de la autora, cuando estos en realidad habían muerto. Por otra parte, la autora presentó al tribunal una confirmación del editor de la revista *La Manchette* sobre la autenticidad del artículo mencionado, confirmación que estaba redactada en un papel cuyo encabezamiento no correspondía al título de la revista, que pasó a convertirse en "*La Machette*". El Estado parte considera inverosímil que el encabezamiento de la correspondencia de una revista impresa contenga semejante falta de ortografía.

4.4 Por último el Estado parte sostiene que la presentación, en la fase de revisión, de un "testimonio" escrito del Sr. Luhulu Lunghe refuerza igualmente la inverosimilitud del relato. Según el Estado parte, parece dudoso que el Sr. Luhulu Lunghe admita explícitamente su responsabilidad en la filtración de información de gran importancia que se produjo en su servicio. Además, parece sorprendente que el autor de esa filtración sea la misma persona que la que parecía culpar a la autora por haber transmitido información confidencial. El hecho de que ese documento haga referencia al artículo publicado en *La Manchette*, considerado falso, refuerza las dudas sobre la fiabilidad de dicho testimonio.

4.5 El Estado parte concluye que las alegaciones y los medios de prueba proporcionados por la autora no permiten considerar que su expulsión la exponga a un riesgo real, concreto y personal de ser torturada.

Comentarios de la autora sobre las observaciones del Estado parte

5.1 El 24 de abril de 2009 la autora reafirmó sus conclusiones precedentes y pidió al Comité que no tuviera en cuenta las observaciones formuladas por el Estado parte. Presenta una copia de una orden de búsqueda, de fecha 25 de enero de 2009, según la cual la ANR habría emitido una orden de búsqueda inmediata contra ella en la ciudad de Kinshasa. La autora afirma que ese documento demuestra la existencia de un riesgo previsible, real y personal de sufrir un trato contrario al artículo 3 de la Convención. Ese riesgo se justifica por el trabajo realizado por la autora antes de su huida de la RDC en el Parlamento y por la información sobre expedientes sensibles del Estado de que ella disponía, así como por su demanda de asilo presentada en Suiza. La autora subraya que el Estado parte no ha puesto

en duda que ella trabajara en el Parlamento congoleño. Insiste en la importancia de la declaración del Relator Luhulu Lunghe y del artículo de la revista —pese a los pequeños errores de forma— como elementos que demuestran los peligros graves que correría en caso de regresar a la RDC.

Observaciones adicionales del Estado parte

6. El 12 de mayo de 2009, el Estado parte reiteró sus observaciones precedentes, manifestando que las observaciones de la autora no contenían ningún elemento nuevo. El Estado parte afirma que la orden de búsqueda presentada por la autora es manifiestamente falsa. Según el Estado parte, parece poco probable que tal orden haya sido emitida en enero de 2009, siendo así que la autora había abandonado la RDC casi cuatro años antes. Además, no deja de ser contradictorio que las autoridades congoleñas publiquen una orden de búsqueda en Kinshasa cuando, según la autora, sabían perfectamente que había presentado una demanda de asilo en Suiza.

Comentarios adicionales de la autora

7. El 24 de mayo de 2009 la autora manifestó que la afirmación del Estado parte según el cual la orden de búsqueda era una falsificación, se basaba solamente en suposiciones carentes de toda objetividad. Según la autora, dicha orden cumplía todos los requisitos de forma y fondo. Afirma haber obtenido copia de la orden a través de un conocido con el que había mantenido contacto, y que la mantenía informada de los riesgos que correría si regresara a su país.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

8. Antes de examinar toda reclamación formulada en una queja, el Comité contra la Tortura debe decidir si esta es o no admisible en virtud del artículo 22 de la Convención. El Comité se ha cerciorado, en cumplimiento del artículo 22, párrafo 5, de la Convención, de que la misma cuestión no ha sido, ni está siendo, examinada según otro procedimiento de investigación o solución internacional. El Comité señala asimismo que se han agotado los recursos internos y que el Estado parte no cuestiona la admisibilidad. Por consiguiente, el Comité considera admisible la queja y procede a examinar el fondo de la cuestión.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

9.1 El Comité debe determinar si la expulsión de la autora a la RDC supondría el incumplimiento de la obligación que tiene el Estado parte en virtud del párrafo 1 del artículo 3 de la Convención de no proceder a la expulsión o la devolución de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.

9.2 A tal efecto, el Comité debe tener en cuenta todas las consideraciones del caso, incluida la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. No obstante, se trata de determinar si la autora corre un riesgo personal de ser sometida a tortura en el país al que será expulsada. El Comité reafirma que la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos no constituye de por sí un motivo suficiente para establecer que una persona determinada estaría en peligro de ser sometida a tortura al regresar a ese país. Deben aducirse otros motivos que permitan considerar que el interesado estaría personalmente en peligro. De igual modo, la inexistencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas de los derechos humanos no significa que deba excluirse la

posibilidad de que una persona esté en peligro de ser sometida a tortura en su situación particular.

9.3 El Comité recuerda su observación general sobre la aplicación del artículo 3 de la Convención y reafirma que "la existencia del peligro [de tortura] debe determinarse atendiendo a razones que vayan más allá de la pura teoría o sospecha, y que, de todos modos, no es necesario demostrar que el riesgo sea "muy probable"⁷; pero sí ha de ser personal y presente. A este respecto, el Comité ha concluido en comunicaciones anteriores que el riesgo de tortura debe ser previsible, real y personal⁸. Además, el Comité observa que, en ejercicio de su competencia en virtud del artículo 3 de la Convención, otorgará un peso considerable a la determinación de los hechos dimanantes de los órganos del Estado parte de que se trate.

9.4 El Comité es consciente de la situación de los derechos humanos que impera en la RDC y de las numerosas violaciones que se siguen produciendo en ese país, incluidas la tortura, las detenciones arbitrarias y la violencia contra las mujeres⁹. El Comité recuerda no obstante que esta situación no constituye en sí misma motivo suficiente para concluir que la autora corra el riesgo de ser sometida a tortura si regresa a su país; deben existir otros motivos que lleven a la conclusión de que el interesado corra *personalmente* ese riesgo.

9.5 El Comité toma nota de las alegaciones de la autora en el sentido de que el hecho de que hubiera transmitido información secreta a los rebeldes de Rwanda cuando trabajaba de recepcionista en la oficina del Relator del Parlamento congoleño en 2004 y de que haya pedido asilo político en Suiza la expondría al riesgo de ser objeto de malos tratos en caso de que regresara a la RDC. El Comité observa sin embargo de que la autora no ha señalado que sufriera malos tratos en la RDC, y que las autoridades nacionales no han considerado dignas de crédito sus afirmaciones.

9.6 Aunque, según su observación general, el Comité sea libre de apreciar los hechos basándose en todas las circunstancias de cada caso, recuerda que no es un órgano jurisdiccional de apelación y que debe conceder un peso considerable a la determinación de los hechos dimanante de los órganos del Estado parte de que se trate¹⁰. En el presente caso, el Comité otorga el debido peso a las conclusiones de las diferentes instancias del Estado parte, que han considerado todos los hechos y los elementos de prueba expuestos por la autora en el procedimiento de asilo y que han llegado a la conclusión de que la autora carece de credibilidad. Estas conclusiones se basan en la inverosimilitud y las contradicciones que presenta el relato de la autora, en particular en lo que se refiere a la

⁷ Observación general N° 1, anexo IX, párr. 6 (véase HRI/GEN/1/Rev.9, vol. II).

⁸ Véanse, entre otras, las decisiones del Comité en los casos *Mostafa Dadar c. el Canadá* (comunicación N° 258/2004), de 23 de noviembre de 2005; *T. A. c. Suecia* (comunicación N° 226/2003), de 6 de mayo de 2005; y *N. S. c. Suiza* (comunicación N° 356/2008), de 6 de mayo de 2010.

⁹ Véanse, entre otros, el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos y las actividades de su Oficina en la República Democrática del Congo, de 10 de enero de 2011 (A/HRC/16/27); el informe del Secretario General sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, de 17 de enero de 2011, (S/2011/20); las conclusiones del Comité sobre el informe presentado por la República Democrática del Congo en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT/C/DRC/CO/1/CRP.1) (2006)); las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el informe presentado por el Estado parte en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR/C/COD/CO/3 (2006)); y el informe sobre la asistencia técnica y fomento de la capacidad, informe conjunto de siete procedimientos especiales temáticos sobre la asistencia técnica al Gobierno de la República Democrática del Congo y examen urgente de la situación en la región oriental del país (A/HRC/10/59).

¹⁰ Véase la Observación general N° 1 del Comité, *supra*, párr. 9. Véase igualmente, entre otras, la decisión del Comité en el caso *T. D. c. Suiza* (comunicación N° 375/2009), de 26 de mayo de 2011, párr. 7.8.

información secreta que habría transmitido a las fuerzas rebeldes de Rwanda, así como a los contactos mantenidos con sus hermanos, la supuesta advertencia formulada por un agente de la ANR, su huida del país e incluso los detalles relativos a su entorno familiar. Estas conclusiones se apoyan también en la utilización de pruebas consideradas falsas, tales como el artículo de prensa antes mencionado¹¹ y el testimonio escrito del Sr. Luhulu Lunghe, Relator en el Parlamento congoleño. El Comité ha prestado la debida atención a los comentarios de la autora, pero considera no obstante que esos argumentos carecen del fundamento suficiente para refutar o aclarar las contradicciones citadas por el Estado parte en sus observaciones.

9.7 Habida cuenta de todo lo que antecede, el Comité no alberga la convicción de que los hechos que tiene ante sí sean suficientes, en su conjunto, para concluir que la autora correría un riesgo previsible, real y personal de ser sometida a tortura, en el sentido del artículo 3 de la Convención, si se la devuelve la República Democrática del Congo.

10. El Comité contra la Tortura, actuando en virtud del artículo 22, párrafo 7, de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, concluye que la devolución de la autora a la República Democrática del Congo por el Estado parte no constituiría una vulneración del artículo 3 de la Convención.

[Adoptada en español, francés e inglés, siendo la versión original el texto francés. Posteriormente se publicará también en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

¹¹ El artículo en cuestión, titulado "*Mme. E. L. recherché [sic] traquée par la police politique*" ("E. L., buscado [sic] y seguida por la policía política") e incluido en el expediente, presenta objetivamente unos caracteres de estilo y tamaño distintos al resto de la página, y figura en la sección de "Economía y sociedad" del periódico *La Manchette* (28 de enero de 2005). El Comité ha observado asimismo que el encabezamiento de la carta que confirma la autenticidad del artículo presenta una grave falta de ortografía ("*La Machette*" en lugar de "*La Manchette*").